

ANDALUCÍA



La presidenta de la Junta, Susana Díaz, con los rectores andaluces en el palacio de San Telmo, en Sevilla. / JULIO MUÑOZ (EFE)

Los números

► La Consejería de Economía sitúa la deuda de la Junta con los campus en 630,9 millones a fecha 1 de septiembre. Supone 301 millones menos que hace un año.

► La Universidad de Granada es a la que más se le debe: 156 millones, lo que supone un 24% de la deuda total de los campus andaluces. Le sigue la Universidad de Málaga (138,8 millones) y la de Sevilla (121 millones).

► A la Universidad de Cádiz la Junta le adeuda 60,7 millones y a la de Jaén, 57. Los campus de Córdoba y Almería arrastran una deuda de 35 y 31 millones respectivamente.

► La Junta debe a las universidades de Huelva y a la Pablo de Olavide, 14 y 1,6 millones. En el caso de la Universidad Internacional de Andalucía lo adeudado asciende a 13 millones.

Economía se compromete a saldar en dos años la deuda con la Universidad

La Junta debe 631 millones a los campus, un tercio menos que hace un año

MANUEL PLANELLES
Sevilla

Entre dos años y dos años y medio tardará el Gobierno andaluz en saldar la deuda millonaria que mantiene con las diez universidades andaluzas. El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ofreció ayer este plazo y resaltó que en el último año se ha conseguido reducir un 32% lo adeudado a los campus públicos.

En este momento, la deuda rozaba los 631 millones, 301 menos que hace un año. En el verano de 2013 se alcanzó el punto álgido, cuando se llegó hasta los 932 millones. El agujero creado era de tal envergadura que casi igualaba al presupuesto anual que el Ejecutivo autónomo transfiere a las diez universidades públicas, que

este año asciende a 1.110 millones de euros. Las protestas de los rectores, que llevan desde 2012 quejándose, consiguieron arrancar un compromiso de pagos a la Junta, que ahora calcula que en dos años podrá tener en orden su situación con los campus. Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga, mostró ayer el agradecimiento de las universidades por esta reducción. Sánchez Maldonado argumentó que se ha llegado a deber tanto porque no se han "hecho recortes" durante la crisis.

La bajada de 301 millones se ha logrado gracias a los pagos extraordinarios realizados por el Gobierno autónomo en los últimos 12 meses. También, gracias a los planes aprobados desde el Ministerio de Hacienda. Por un

lado, el decreto de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones permitió en otoño a los campus andaluces hacer frente a facturas pendientes con proveedores por valor de 100

El Gobierno andaluz prorroga otro año más el modelo de financiación

millones. Además, en la última edición del Fondo de Liquidez Autonómica el ministerio admitió que las universidades estuvieran incluidas, con lo que se ha reducido en otros 20 millones lo adeudado a los campus.

La bola de nieve de la deuda se paró a partir de 2012, cuando el Gobierno autónomo aprobó un plan de ajuste que paralizó la construcción de infraestructuras científicas y generales. Esto ha permitido también que no aumentara lo adeudado y se haya ido enjugando.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se reunió ayer en Sevilla con los rectores. En el encuentro se les comunicó que el sistema de financiación de las universidades volverá a prorrogarse un año más, con lo que estará también vigente en 2015. El modelo actual —que implica que las universidades reciban de la Junta el equivalente al 1,05% del PIB regional— data de 2007 y debía durar sólo hasta 2011. Pero año a año se ha prorrogado. Cuando se ideó, en

una etapa expansiva, estaba pensado para que las universidades aumentaran su presupuesto cada ejercicio. Pero el impacto de la crisis ha provocado que lo destinado desde la Administración para la enseñanza superior haya menguado. Entre 2009 y 2012, por ejemplo, el PIB andaluz se redujo un 1,9%. Desde que comenzó la crisis, el presupuesto de los 10 campus ha caído un 16% (223 millones). Una parte importante de esa reducción se debe a la bajada del 5% del sueldo de los docentes (que supone unos 45 millones anuales). Díaz se ha comprometido a restituir en 2015 la paga extra a los funcionarios, y los rectores esperan que este paso también se refleje en el Presupuesto que ahora negocian PSOE e IU.

"El compromiso es que el año que viene recibamos al menos lo mismo que este", indicó ayer Antonio Ramírez de Arellano, rector de la Universidad de Sevilla. Otro de los problemas que arrastra la enseñanza superior es la congelación de las plantillas. Sánchez Maldonado confió en que la tasa de reposición que impone el Gobierno central "no sea tan fuerte" como hasta ahora.

La sangría de la formación

ROMÁN OROZCO



Hace justo un año, el 7 de septiembre, la presidenta Susana Díaz afirmaba en su discurso de toma de posesión: "Quiero gobernar con las ventanas abiertas, para oír lo que dice la calle".

Si las ha tenido abiertas este mes de agosto, habrá escuchado alto y claro lo que dice la calle: que está harta de la corrupción. Si los ERE, que ya están en manos del Tribunal Supremo, fueron una estocada en todo lo alto que dejó al Gobierno

malherido, el fraude en los cursos de formación para parados ha sido la puntilla.

Aunque no esté directamente implicado en ninguno de los dos casos, el Gobierno tiene la obligación de explicar a la ciudadanía qué ha pasado. Dónde han ido a parar los 750 millones de los ERE y los 950 de los cursos de formación que, según la juez Alaya, están pendientes de justificar de los ejercicios 2008-2011. Cifra esta que el PP cuadruplica, aunque sin aportar pruebas. Como mínimo, estamos hablando de unos 2.000 millones que se habrían escurrido por las oscuras tuberías de la Consejería de Empleo en una década.

Cumpliendo la promesa de ventanas abiertas, Susana Díaz ha tomado dos decisiones importantes este mes de agosto: una, publicar la relación de 1.162 empresas exoneradas, es decir, que no tuvieron que justificar el dinero recibido antes de percibir nuevas subvenciones. Y dos, la aprobación de una nueva ley que pondrá

coto a la sangría de los fondos de formación: se eliminan las exoneraciones (de hecho Díaz las eliminó nada más llegar a la presidencia), todas las ayudas se darán por concurso público y las empresas deberán tener otros ingresos además de las subvenciones.

Los ciudadanos quieren saber cuánto y quiénes han defraudado

Hay que eliminar a los cazasubvenciones. Como el exconsejero socialista de Hacienda Ángel Ojeda, quien, según la policía, percibió 49,8 millones de euros, por lo que fue detenido e imputado. También ha sido expulsado del PSOE.

Por último, tras la presión feroz del PP para que se convocaran dos plenos ex-

traordinarios, el Gobierno ha aceptado que el consejero de Educación, Luciano Alonso, responsable ahora de los cursos de formación, acuda este jueves 4 a una comisión extraordinaria para contar en el Parlamento lo que sabe sobre este gigantesco fraude. Anuncia "datos muy esclarecedores".

¿Es suficiente o habría que dar un paso más? ¿Una comisión de investigación? IU la descartaba hace unas semanas, pero la ve cada vez más necesaria. El PSOE la rechaza. Deberían pensárselo algo más. Les fue rentable mediáticamente la comisión de investigación de los ERE y han podido echarle en cara al PP que no haga lo mismo con la Gürtel.

¿Por qué no abrir esa ventana? Los ciudadanos quieren que por ella salga una explicación clara y veraz de cuánto se ha defraudado y quiénes han sido los sinvergüenzas que se han llevado el dinero. @JRomanOrozco